

AI-Índice: AMR 41/6347/2017

Referencia: TG AMR 41/2017.017

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos S/N
Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11850
México

25 de mayo de 2017

ASUNTO: POSIBLE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL POR ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO EN PALMARITO TOCHAPAN, PUEBLA

Estimado Señor Presidente:

Nos dirigimos a Ud. con esta carta abierta para expresar nuevamente nuestra profunda preocupación sobre el impacto que la estrategia de seguridad actual tiene en el disfrute y garantías de los derechos humanos en México. En específico, quisiéramos llamar su atención sobre el suceso del que han dado cuenta dos boletines de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los que se anunció públicamente que elementos del ejército mexicano habían realizado operativos de seguridad pública en el poblado de Palmarito Tochapan, estado de Puebla, durante el día 3 de mayo de 2017 y que en dichos eventos habrían fallecido siete personas, incluyendo cuatro soldados.

Días después de lo sucedido surgieron públicamente una serie de videos tomados por cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos. En uno de esos videos se aprecia con claridad a una persona vestida con uniforme militar dando muerte a un hombre que yacía en el suelo.

Amnistía Internacional verificó independientemente el video y concluyó que, en efecto, el lugar videograbado se trata de Palmarito Tochapan, que las imágenes no habrían sido distribuidas en internet antes del 4 de mayo de 2017, y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en el video son consistentes con aquellas del Ejército mexicano. Asimismo, la organización no encontró en sus análisis, hasta donde llega su conocimiento, ningún elemento que haga sospechar que el video habría sido manipulado o alterado de forma alguna.

Debido a esta evidencia, la organización tiene razones suficientes para inclinarse a pensar que en la noche del 3 de mayo de 2017 se habría llevado a cabo una ejecución extrajudicial, considerado como un crimen bajo el derecho internacional y una grave violación a los derechos humanos.

Amnistía Internacional hace un llamado para que este hecho sea investigado de forma pronta, independiente y exhaustiva y que dicha investigación y, en su caso, cualquier acción judicial, debe ser llevada a cabo exclusivamente ante tribunales civiles competentes, con exclusión de la jurisdicción militar en cualquier instancia. Las investigaciones deben contemplar la presunta responsabilidad de los jefes y otros superiores que hubieren sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubieren debido saber que las fuerzas militares estaban cometiendo ese crimen o se proponían cometerlo y no hubieren adoptado todas

las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión, o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades civiles competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Asimismo, la organización reitera su recomendación constante de dar por terminada la participación de las fuerzas armadas mexicanas en operativos y otras funciones de seguridad pública, las que deben recaer específicamente en las diversas corporaciones de la policía, garantizando que estas cuenten con la formación, la asignación de recursos y claros protocolos para el pleno respeto de los derechos humanos.

Le reitero las seguridades de mi más alta consideración,

Erika Guevara Rosas
Directora para las Américas

c.c.p. Lic. Raúl Cervantes Andrade. Procurador General de la República
c.c.p. General Salvador Cienfuegos Zepeda. Secretario de la Defensa Nacional